



Saludamos los avances en materia de seguridad, derechos humanos y paz. Hacemos un llamado a reforzar acciones para superar la crisis humanitaria

Bogotá, 22 de diciembre de 2022

La llegada al gobierno del Pacto Histórico encabezado por el Presidente Gustavo Petro y la Vicepresidenta Francia Márquez, ha implicado un cambio de rumbo importante en materia de políticas de seguridad, derechos humanos y construcción de paz. Las políticas de Justicia Social, Justicia Ambiental y Paz Total prometen un avance hacia un modelo económico incluyente, con una paz sostenible y justa en los territorios para las comunidades que por décadas han padecido la violencia y la exclusión. En amplios sectores de la sociedad colombiana, genera esperanza la reactivación de la implementación del Acuerdo Final de Paz con las FARC, la reanudación de las negociaciones con el ELN y el acercamiento, para el sometimiento a la justicia, de todos los actores ligados a economías ilegales que ejercen violencia en los territorios y que, en todo caso, debe incluir medidas efectivas para resolver las causas que propician el surgimiento de estas violencias.

La herencia dejada por el gobierno del expresidente Iván Duque y los gobiernos anteriores representada en la crisis humanitaria, el deterioro de la situación de derechos humanos, la parálisis en la implementación del Acuerdos de Paz, el trato violento y represivo a la protesta social, la corrupción, el saqueo de los recursos y los bienes públicos, la violencia desbordada contra la población a través del posicionamiento y expansión de diferentes actores criminales, requieren hoy un esfuerzo en materia penal y disciplinaria de los entes de investigación y control: la impunidad no puede seguir reinando frente a estos hechos.

Apoyamos los anuncios y medidas que, en materia de paz y derechos humanos, ha implementado el nuevo gobierno y que ha aliviado la situación humanitaria en algunos municipios del país, tales como el acogimiento de propuestas del movimiento de derechos humanos, el nombramiento de personas defensoras en cargos de autoridad, los anuncios de cambio de la política de seguridad hacia un nuevo concepto de Seguridad Humana, la puesta en marcha del Plan de Emergencia para la protección de personas defensoras, firmantes AFP y liderazgos sociales, el reconocimiento oficial de la responsabilidad del Estado en la perpetración de graves masacres y actos de genocidio contra la población, así como los avances en las negociaciones de paz con el ELN y con otros actores de la criminalidad; todas estas acciones permitirán avanzar hacia la Paz, tan esquiva para los colombianos y colombianas.

Pese a esto, nos preocupa la continuación de la crisis humanitaria y la violencia ejercida contra el liderazgo social y comunitario en amplias regiones del país. Si bien, el Gobierno Nacional fijó unas condiciones para el proceso de acercamientos en el marco de la Paz Total, los grupos de criminalidad organizada siguen perpetrando hechos violentos, como es el caso de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia –AGC- y de las denominadas disidencias, cuyo motor sigue alimentándose a partir del aumento de los cultivos de uso ilícito. Durante los primeros cuatro meses de gobierno los confinamientos de comunidades, especialmente étnicas y los desplazamientos forzados, se siguen manteniendo en los territorios, al igual que el reclutamiento de niños, niñas y jóvenes que son utilizados para fortalecer las maquinarias de la guerra. Las masacres continúan a un ritmo aterrador, pues se perpetúa una cada cuatro días, en tanto que cada dos días un líder social ha sido asesinado. Esta expansión de la violencia y las

estructuras criminales constituyen un proceso de genocidio continuado, que parece no estar siendo contrarrestado por una acción proactiva y contundente por parte de las instituciones con responsabilidad en la materia.

Ante este panorama, urge reforzar las medidas de protección y seguridad hacia las comunidades, liderazgos y territorios. La respuesta estatal integral del Estado debe estar orientada a la desarticulación y desestructuración completa y definitiva de los complejos macro-criminales y sus redes de apoyo, proceso en el cual será fundamental el apoyo de la comunidad internacional. Las estrategias de dismantelamiento de estructuras criminales no pueden estar supeditadas a expectativas de sometimiento a la justicia de las estructuras del narcotráfico y el paramilitarismo, a la vez que, las exigencias humanitarias hacia la Paz Total no pueden reducirse a compromisos ambiguos, sin mecanismos efectivos de verificación. Los anuncios de adquisición billonaria de aviones de guerra, no se compadecen con la situación de hambre y las necesidades básicas que padecen buena parte de la población. Urge una revisión de estos presupuestos en seguridad, con el fin de que estén orientados a la garantía de los derechos básicos de los territorios históricamente afectados por la pobreza y la exclusión.

Instamos al Gobierno Nacional a acelerar la implementación del Plan de Emergencia, convocar de manera permanente e indelegable a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad –CNGS-, presidida por el Presidente y los Ministros concernidos para reevaluar, diseñar y poner en marcha las medidas para superar la grave crisis humanitaria y el control violento de la criminalidad organizada en cada vez más regiones del país. De igual forma, hacemos un llamado para que el Congreso y los demás poderes públicos, se comprometan en la solución definitiva de la situación jurídica de los cientos de manifestantes judicializados por acciones en el marco de la protesta social, víctimas de imputaciones desproporcionadas que les impedirían beneficiarse de la excarcelación y obtener su libertad, con decretos que dejan en los funcionarios del poder judicial la última palabra sobre su situación.

La Coordinación Colombia Europa Estados Unidos - CCEEU, plataforma que aglutina 289 organizaciones sociales y defensoras de DDHH; saluda los esfuerzos del Gobierno Nacional en la búsqueda de la paz con la reactivación de la salida negociada al conflicto político, social y armado, el cese al fuego unilateral decretado por el Ejército de Liberación Nacional –ELN; exige que los demás actores armados muestren su voluntad de paz con manifestaciones sinceras de respeto a la vida, la libertad e integridad de las comunidades; hace un llamado a las fuerzas de seguridad, autoridades locales, regionales y nacionales a comprometerse con acciones reales y efectivas orientadas a transformar la realidad cotidiana de las comunidades, territorios y personas más afectadas por la violencia, la marginación y la exclusión.

Reiteramos nuestro compromiso como plataforma de DDHH para participar y aportar en los propósitos que tengan como base la garantía de los derechos humanos y de los derechos de las víctimas.

COMITÉ OPERATIVO
COORDINACIÓN COLOMBIA EUROPA ESTADOS UNIDOS – CCEEU